
Barreras estructurales del crédito agrícola en territorios rurales e indígenas y sus implicaciones para la Economía Social y Solidaria

Recepción

27 | marzo | 2026

DOI: <https://doi.org/10.32870/cl.v2i35.8177>

Aceptación

03 | junio | 2026

Edgar Andrés De la Cruz Rojas*

ORCID: 0000-0002-1510-2099

Universidad Autónoma Metropolitana, México

Manuel Lara Caballero**

ORCID: 0000-0002-5312-3085

Universidad Autónoma Metropolitana, México

Resumen

El acceso al financiamiento formal en México muestra limitaciones persistentes en contextos campesinos, aunque estas no parecen explicarse por déficits organizativos locales, sino por un diseño institucional que opera bajo lógicas mercantiles poco compatibles con la propiedad social y los modos de vida en el territorio. A partir de esta inquietud, el trabajo se acerca a distintas barreras estructurales que aparecen en la interacción cotidiana con el crédito, observando cómo estas fricciones inciden en la continuidad de proyectos autogestionados. El recorrido articula elementos del diseño de la política pública, la arquitectura financiera y las dinámicas territoriales, dejando ver tensiones entre esquemas formales y prácticas comunitarias. En ese cruce, el sistema financiero tiende a exigir garantías estandarizadas que no siempre dialogan con formas colectivas. Frente a ello, prácticas como el ahorro compartido y la ayuda mutua se mantienen como referentes para sostener la vida económica en el campo.

Palabras clave: exclusión financiera, economía social y solidaria, crédito agrícola, autogestión comunitaria, barreras estructurales

*Indígena Yokot'an y Maestro en Estudios Organizacionales, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1510-2099>; Correo electrónico: edgar111meta@gmail.com

**Doctor en Política Pública, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5312-3085>; Correo electrónico: m.lara@correo.ler.uam.mx

Structural barriers to agricultural credit in rural and indigenous areas and their implications for the social and solidarity economy

Abstract:

Access to formal financing in Mexico faces persistent limitations in rural communities, although these do not appear to stem from local organizational shortcomings, but rather from an institutional framework that operates according to market-driven logic that is largely incompatible with communal ownership and local ways of life. Building on this concern, this study examines various structural barriers that arise in daily interactions with credit, observing how these frictions affect the continuity of self-managed projects. The analysis brings together elements of public policy design, financial architecture, and territorial dynamics, revealing tensions between formal frameworks and community practices. At this intersection, the financial system tends to demand standardized guarantees that do not always align with collective forms. In response, practices such as shared savings and mutual aid remain key to sustaining economic life in rural areas.

Keywords: financial exclusion, social and solidarity economy, agricultural credit, community self-management, structural barriers

Introducción: La racionalidad campesina y el “Buen Vivir”

Reflexionar sobre las dinámicas cotidianas en los territorios rurales requiere pensar en relatos que cuestionan las lógicas económicas predominantes. Felipe Giraldo (2025) recupera reflexiones desde las comunidades mayas en torno al *ma’alob yanikeech* (buen vivir), describiéndolo como un esfuerzo por darse en colectivo lo que resulta suficiente, desprendiéndose de los excesos y evitando tomar más de lo necesario. Estas expresiones dialogan de cerca con las tensiones que genera el paradigma capitalista de la escasez, el cual asume una carencia constante, necesidades infinitas y una búsqueda ininterrumpida de acumulación, donde en contraste, también se constata un paradigma comunitario de la abundancia, entendido no como el acaparamiento material, sino como la capacidad continua de donar, recircular y sostener el tejido relacional. Estas configuraciones dejan abiertas interrogantes acerca de cómo las redes de reciprocidad logran subsistir en un entorno global que presiona sistemáticamente hacia la maximización del beneficio individual.

La materialidad de estas lógicas comunitarias toma forma en la organización diaria de la unidad familiar campesina e indígena. Salgado Villavicencio (2018) retoma planteamientos que sugieren que estos hogares no estructuran sus esfuerzos alrededor de la obtención de la ganancia monetaria máxima. Por el contrario, sus dinámicas productivas intentan orientarse hacia la reproducción continua de la vida, el sostenimiento de la fuerza de trabajo familiar y la satisfacción de necesidades inmediatas de consumo. Esta aproximación a la racionalidad campesina también es presentada por Felipe Giraldo (2025), que habla sobre las economías vernáculas, donde el trabajo y los bienes se intercambian primordialmente para cuidar el entorno y preservar los vínculos sociales, antes que para atesorar capital. Al reconstruir estas experiencias, existen fricciones profundas cuando los grupos locales se ven obligados a interactuar con un entorno formal que asume un comportamiento estrictamente mercantil, sugiriendo un choque de visiones sobre el sentido mismo de la riqueza.

El intento por mantener la autonomía sobre los medios de vida suele encontrarse con presiones institucionales

que exigen la adopción de comportamientos ajenos a los tiempos del territorio. Salgado Villavicencio (2018) describe cómo las familias agrícolas experimentan periodos de ingresos altamente irregulares, lo que las impulsa a buscar mecanismos para homogeneizar su consumo y mitigar la incertidumbre climática o económica. Sin embargo, al acercarse a las estructuras de financiamiento y desarrollo, se encuentra una tensión persistente: los esquemas formales operan bajo los principios de escasez y acumulación privativa explorados por Felipe Giraldo (2025), imponiendo reglas contractuales que frecuentemente ignoran las prácticas de ayuda mutua. Este escenario refleja un desajuste donde la arquitectura externa intenta superponer una lógica de riesgo individual sobre un entramado sostenido en la confianza, dejando sobre la mesa la sensación de un desencuentro que fractura la organización local.

La exploración de estas disonancias funciona como un punto de partida para intentar comprender las dificultades que experimentan las iniciativas rurales al tratar de sostener sus modos de vida en el tiempo, donde la exclusión de las comunidades no deriva simplemente de una ausencia de recursos o de una incapacidad técnica, sino de un enfrentamiento estructural entre un modelo comunitario basado en la abundancia compartida y un sistema institucional que castiga las prácticas no acumulativas. Al intentar situar a la economía social y solidaria como el eje integrador de la vida rural, aparecen cuestionamientos sobre las dimensiones normativas, socioculturales y tecnológicas que actúan como barreras para estos grupos. La reconstrucción de estos procesos en los siguientes apartados del presente artículo invita a explorar cómo operan estas fricciones en la materialidad del territorio y de qué manera las familias intentan navegar por un entorno que históricamente desconoce sus realidades.

En este sentido, este trabajo intenta explorar las barreras estructurales del crédito agrícola en los territorios indígenas y campesinos, articulando observaciones sobre el diseño de la política pública, la arquitectura institucional y las formas de organización económica local. En lugar de asumir un déficit en las capacidades de las poblaciones rurales, la exploración se enfoca en examinar cómo interactúan las limitaciones normativas, tecnológicas y socioculturales con las prácticas de la economía social y solidaria. Durante este ejercicio de reconstrucción, se busca comprender las lógicas de exclusión que operan desde el exterior, dejando abiertas interrogantes acerca de las posibilidades reales que tienen las comunidades para apropiarse de los instrumentos de financiamiento frente a un diseño estatal que frecuentemente castiga sus dinámicas colectivas.

Para organizar estas reflexiones, el texto se compone de cuatro apartados. En un primer momento, la exploración se adentra en los principios de la economía social y solidaria (ESS) desde las materialidades del territorio, intentando describir cómo el ahorro colectivo y la reciprocidad sostienen la cotidianidad de los grupos. A continuación, las observaciones se trasladan hacia la desconexión del crédito agrícola institucional, relatando el choque constante entre las exigencias patrimoniales de la banca y la tenencia comunal de la tierra. A partir de estas tensiones, una tercera mirada intenta desglosar cómo operan en la práctica las barreras estructurales, en este caso las institucionales, tecnológicas y socioculturales, que experimentan las iniciativas locales al relacionarse con el entorno formal. Finalmente, la revisión se acerca a los modelos de financiamiento contruidos desde las propias organizaciones territoriales, observando cómo estas experiencias intentan sortear dichas limitaciones lidiando cotidianamente con sus propias fragilidades y contradicciones.

Este planteamiento general sirve como antesala para adentrarse en la materialidad de los intercambios diarios, donde antes de evaluar el desencuentro con las instituciones bancarias y gubernamentales, resulta fundamental situar la mirada en el interior de los territorios para comprender cómo las familias intentan

Cruz, E., Lara, M.

gestionar su propia supervivencia económica apoyándose en sus recursos más inmediatos. Esta necesidad de reconocimiento abre paso a la exploración de las prácticas de ayuda mutua, confianza y comercio local que configuran los cimientos de la vida en común.

1. Principios de la ESS y las finanzas populares en el territorio

En los espacios rurales, las interacciones cotidianas suelen sostenerse sobre dinámicas que privilegian la reproducción de la vida por encima de la acumulación material. Al aproximarse a las prácticas de reciprocidad, como el tequio o la mano vuelta, surgen formas de intercambio de trabajo que prescinden de la mediación estricta del dinero (Felipe Giraldo, 2025). Estas dinámicas dialogan estrechamente con lo que Salgado Villavicencio (2018) documenta en las trayectorias de las organizaciones de la sierra, donde el ahorro colectivo y la confianza mutua configuran un soporte frente a la vulnerabilidad y la usura de los prestamistas informales. En este cruce de perspectivas, cobra sentido la noción de valor de vínculo propuesta por Felipe Giraldo (2025), en la que la riqueza no se contabiliza en términos de escasez o capital financiero, sino en la densidad de las relaciones comunitarias que sostienen a los grupos. Quedan abiertas, sin embargo, interrogantes sobre las tensiones que experimentan estos sistemas vernáculos cuando interactúan de manera cotidiana con las lógicas mercantilistas.

Las iniciativas de finanzas populares surgen en estos territorios como un esfuerzo por mantener cierto control sobre los propios medios de vida. Jiménez Maldonado (2017) ubica estas estrategias informales como una respuesta natural de los sectores excluidos, quienes construyen arreglos de capital compartido a partir de la organización local. Este planteamiento se relaciona con lo propuesto por Salgado Villavicencio (2018) sobre las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales operan bajo esquemas donde el aval social y el compromiso con la comunidad buscan sustituir a las garantías patrimoniales que exige la banca tradicional. Al reconstruir estos procesos, aparecen relatos que muestran cómo las familias intentan homogeneizar su consumo en periodos de bajos ingresos agrícolas mediante estos fondos comunes. Estas configuraciones sugieren un apoyo mutuo constante, aunque en ocasiones las contingencias económicas profundas o las crisis climáticas revelan límites en la capacidad de respuesta de las estructuras autogestionadas.

En el intercambio de bienes a nivel local, toman relevancia las redes territoriales enfocadas en acortar las distancias entre la producción y el consumo. Gómez Rodríguez y Barbosa Pérez (2023) abordan los circuitos cortos de comercialización como espacios donde se intenta reivindicar una relación más horizontal, buscando reducir la intermediación que históricamente ha condicionado los ingresos de las familias campesinas. Esta mirada a la comercialización se relaciona de manera orgánica con las notas de Felipe Giraldo (2025) en torno a las economías solidarias y el multitrueque, donde la intención de las redes no se fija en maximizar utilidades, sino en distribuir las abundancias producidas de manera colectiva para satisfacer necesidades inmediatas del entorno, donde quedaron al descubierto fricciones relacionadas con la escala de estos circuitos y las dificultades de infraestructura que experimentan los productores rurales. El desarrollo de estas prácticas deja sobre la mesa cuestiones latentes sobre cómo sostener el abasto local frente a la competencia asimétrica que imponen los sistemas agroalimentarios convencionales.

En las prácticas comunitarias cotidianas, los intercambios materiales suelen estar sostenidos por entramados sociales que trascienden la transacción económica. Al intentar comprender la profundidad de estas interacciones, cobra relevancia la noción de valor de vínculo que propone Felipe Giraldo (2025), la cual sugiere que el verdadero trasfondo de estas experiencias solidarias es la densidad de la urdimbre relacional. Bajo esta

mirada, la riqueza no se contabiliza en la acumulación de capital, sino en la capacidad de regenerar el tejido social a través de la cooperación y la ayuda mutua. Esta perspectiva dialoga con las formas de organización vernáculas, donde el valor se centra en el cuidado compartido de la vida; sin embargo, al documentar estos procesos, quedan abiertas interrogantes sobre cómo estas lógicas de abundancia relacional logran sostenerse frente a las presiones individualizantes que impone el entorno mercantil formal.

Al reconstruir los escenarios de vulnerabilidad en los territorios rurales, puede identificarse que la ausencia de servicios financieros adecuados conduce frecuentemente a las familias hacia el endeudamiento informal. Salgado Villavicencio (2018) relata cómo, ante la urgencia de recursos para la siembra o contingencias familiares, las personas suelen recurrir a los prestamistas locales o agiotistas, quienes operan con tasas de interés usureras que profundizan la precariedad. En este contexto adverso, están presentes las iniciativas de finanzas populares, descritas por el mismo autor como esfuerzos contruidos desde la base para generar un arreglo de capital compartido entre los actores más excluidos. Estas estructuras autogestionadas intentan desempeñar la función de un escudo protector frente a la usura, apoyándose en la organización local para homogeneizar el consumo en tiempos de escasez. No obstante, en los registros de campo se asoman tensiones cuando los recursos colectivos resultan insuficientes ante emergencias severas que rebasan la capacidad de respuesta de la red comunitaria.

La articulación entre el mantenimiento de los vínculos y la defensa frente a los prestamistas informales se materializa en los esquemas de ahorro y crédito basados en la confianza. Salgado Villavicencio (2018) expone que, en contraposición a las garantías patrimoniales requeridas por la banca convencional, las finanzas populares operan mediante el aval social y la presión del grupo solidario. Esta dinámica se relaciona de manera orgánica con los planteamientos de Felipe Giraldo (2025) sobre la desprivatización de la riqueza, donde los bienes producidos no se acumulan individualmente, sino que se redistribuyen dentro de la misma organización. Al explorar estas experiencias conjuntas, aparecen relatos sobre cómo el manejo colectivo del dinero intenta reivindicar la autonomía comunitaria; aunque, al mismo tiempo, estas configuraciones dejan sobre la mesa fricciones latentes, particularmente en lo que respecta al desgaste de las relaciones de confianza cuando los grupos enfrentan crisis económicas prolongadas o incumplimientos internos.

Al ordenar las clasificaciones documentadas en las prácticas financieras rurales, toma forma un contraste marcado entre las lógicas de operación comercial y las configuraciones de corte solidario. Para visualizar estas diferencias, se estructuró la Tabla 1, donde se intenta sintetizar cómo interactúan ambos modelos a partir de sus enfoques hacia el riesgo, la participación y las garantías exigidas.

Tabla 1. *Contraste entre metodologías de la banca convencional y la banca social*

| Criterio de operación | Banca Convencional | Banca Social / Comunitaria |
|------------------------------|---|--|
| Objetivo central | Búsqueda y obtención prioritaria de beneficios económicos individuales. | Obtención conjunta de viabilidad económica y fines sociales. |

Cruz, E., Lara, M.

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Diseño de los productos | Estandarizados y adaptados a las necesidades operativas de la propia entidad financiera. | Moldeados de forma irregular según las necesidades, ritmos o preferencias de los grupos locales. |
| Condiciones crediticias | Centradas fundamentalmente en garantías patrimoniales comprobables, avales formales o historiales crediticios. | Basadas en el aval social, la confianza mutua, el compromiso del grupo y la viabilidad del proyecto en el entorno. |
| Participación y decisiones | Escasa o nula participación del usuario; decisiones tomadas por directivos y gestores externos. | Búsqueda de una gobernanza más participativa, donde los socios intentan incidir en el uso ético y destino de los fondos. |

Nota. Adaptado de los registros elaborados por Salgado Villavicencio (2018) sobre las divergencias metodológicas en la provisión de servicios financieros.

En este sentido, se pone de manifiesto cómo la estructuración de la banca convencional responde a una racionalidad donde el usuario es visto estrictamente como un cliente individual (Salgado Villavicencio, 2018). Estas descripciones dialogan de cerca con las observaciones de Felipe Giraldo (2025) al notar que la banca comunitaria intenta, a menudo con tensiones y contradicciones, sostenerse sobre el “valor de vínculo”, reconociendo al tejido social como el soporte principal de viabilidad frente a la usura. En estos encuentros de posturas, surgen diferencias sustanciales sobre cómo se valora el riesgo: mientras un modelo exige escrituras y bienes acumulados, el otro apela a la presión solidaria y al compromiso moral con los pares. Estas configuraciones dejan abiertas reflexiones sobre la fragilidad que experimentan los esquemas alternativos cuando sus miembros intentan mantener principios de apoyo mutuo inmersos en una economía de mercado más amplia.

Las interacciones descritas en este ámbito de las finanzas populares muestran un esfuerzo continuo por autogestionar recursos desde la base comunitaria; sin embargo, en las experiencias territoriales también están presentes las limitaciones de estas iniciativas al tratar de escalar sus procesos o cubrir contingencias mayores. Al acercarse a los mecanismos de financiamiento formal para sostener sus sistemas de vida, los grupos locales suelen encontrarse de frente con la arquitectura de la política pública crediticia. Estas interacciones, en las que el marco normativo exige formas de propiedad y comportamientos individualizados que no concuerdan con la organización ejidal o comunal, sugieren una contradicción profunda de paradigmas. Estas dinámicas conducen a explorar cómo se configura históricamente la desconexión del crédito agrícola institucional frente a los pequeños productores, dejando la interrogante de hasta qué punto el diseño mismo de estos instrumentos formales genera una exclusión que va mucho más allá de la simple ausencia de sucursales bancarias.

2. La desconexión y exclusión del crédito agrícola institucional

Al explorar la configuración del sistema financiero formal en los territorios agrícolas, surgen relatos que describen un repliegue progresivo de las instituciones estatales durante las últimas décadas. Almeraya-Quintero

y otros (2011) documentan cómo la reestructuración de la política pública intentó ceder el espacio a la banca comercial, bajo el supuesto de que lograría cubrir la demanda de las comunidades. Sin embargo, existe un vacío importante donde la infraestructura bancaria tiende a concentrarse casi exclusivamente en los núcleos urbanos, dejando amplias zonas geográficas sin alternativas de proximidad (Salgado Villavicencio, 2018). Esta dinámica se relaciona con la transición hacia esquemas de primer y segundo piso en la banca de desarrollo, tal como ocurre con instituciones como Financiera Rural o los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), cuyas lógicas de operación dejan abiertas interrogantes sobre su flexibilidad para interactuar con los ritmos de los actores de menor escala.

Durante las interacciones cotidianas entre las familias campesinas y las entidades de financiamiento, se hacen visibles fricciones constantes ligadas a la percepción del riesgo y la exigencia de colaterales. Almeraya-Quintero y otros (2011) notan que la banca tradicional, e incluso ciertos brazos de la banca de desarrollo, suelen calificar las actividades agropecuarias de los pequeños productores como altamente riesgosas, argumentando la vulnerabilidad ante fluctuaciones climáticas y la incertidumbre de los mercados locales. Ante este panorama, los requerimientos de las instituciones suelen exigir garantías reales, escrituras o historiales crediticios formales que difícilmente concuerdan con la realidad de la tenencia comunal de la tierra o los ingresos irregulares del campo (Salgado Villavicencio, 2018). Estas exigencias dialogan con los señalamientos de Campos (2017) respecto a las dificultades históricas de los programas formales para adaptar los instrumentos crediticios a la propiedad social, lo que sugiere un desencuentro profundo entre el diseño estandarizado del producto financiero y la materialidad de la vida rural.

En los esquemas operados mediante la banca de segundo piso, donde el Estado canaliza recursos a través de intermediarios para intentar ampliar su cobertura, aparecen nuevas capas de complejidad. Campos (2017) expone que estas entidades dispersoras a menudo terminan replicando los mismos criterios restrictivos de la banca comercial, priorizando la recuperación de sus carteras por encima de la incursión en zonas marginadas. Esta situación se entrelaza de manera orgánica con lo propuesto por Almeraya-Quintero y otros (2011), en los que se muestra una tendencia de las instituciones a concentrar los créditos en regiones geográficas que ya cuentan con mayor tecnificación agrícola e infraestructura, marginando sistemáticamente a los territorios dispersos. La arquitectura formal del financiamiento, al trasladar el riesgo a los intermediarios sin modificar las reglas de evaluación, termina por alejar a los productores más vulnerables. Estas cuestiones invitan a reflexionar sobre hasta qué punto el diseño del sistema institucional asume la exclusión territorial como un rasgo inherente a sus operaciones.

Sobre los requerimientos técnicos de los instrumentos de crédito, existen cuestiones específicas relacionadas con el respaldo material de los préstamos. En las descripciones de Salgado Villavicencio (2018), la metodología del financiamiento convencional se basa sobre la documentación formal y la exigencia de colaterales individuales, elementos que en la práctica diaria funcionan como filtros de acceso. Campos (2017) hace visible que las familias campesinas suelen carecer de este tipo de respaldos patrimoniales en los términos precisos que la arquitectura financiera urbana demanda. La noción misma de “garantía” asume a un sujeto propietario individual y excluyente, lo que sugiere un desfase frente a las formas de pertenencia que predominan en los territorios agrícolas, dejando interrogantes acerca de la rigidez de los contratos bancarios cuando intentan operar fuera de su entorno de origen.

El desencuentro toma mayor forma con las dinámicas de tenencia de la tierra en las comunidades.

Cruz, E., Lara, M.

En amplias zonas del medio rural, la tierra se habita y se trabaja bajo lógicas de propiedad social, ejidal o comunal, una condición histórica que impide que las parcelas sean presentadas como bienes enajenables o hipotecables ante una entidad externa (Salgado Villavicencio, 2018). Esta particularidad territorial se entrelaza con la propuesta de Romero Cruz (2026), quien retoma planteamientos sobre cómo la limitada certidumbre de tenencia, juzgada desde la perspectiva estricta de la propiedad privada, restringe las posibilidades de los productores para vincularse con esquemas formales. Al intentar encajar la tierra de uso común en el recuadro de la garantía prendaria, surge una incompatibilidad de raíz: los manuales de operación buscan un individuo con escrituras privadas, mientras que la organización local sostiene el territorio como un bien indivisible, revelando tensiones profundas que no logran resolverse mediante la simple oferta de productos en ventanilla.

En la reconstrucción de estos procesos, aparecen algunos esfuerzos institucionales por flexibilizar estas exigencias, aunque con resultados irregulares. Campos (2017) documenta modificaciones normativas en México, dentro de la banca de desarrollo, como el intento de aceptar la propia cosecha como garantía natural (créditos de avío), buscando sortear la falta de títulos de propiedad enajenables. Sin embargo, en la práctica de estos esquemas, se hicieron visibles nuevas complicaciones operativas; la ausencia de registros catastrales individuales desagregados dentro de los ejidos dificulta a las instituciones verificar la correspondencia entre el productor que solicitaba el préstamo y la parcela en garantía. Estas configuraciones sugieren que, incluso cuando se intenta adaptar el instrumento, el diseño administrativo insiste en buscar certezas individualizadas dentro de entramados sociales complejos, manteniendo abiertas las fricciones sobre cómo respaldar materialmente el financiamiento en escenarios donde predomina la propiedad compartida.

En este sentido, sobre la mecánica interna de los productos financieros ofrecidos a los productores agrícolas, existe un desfase entre las condiciones de los contratos y las dinámicas de subsistencia en el territorio. Campos (2017) hace visible que los instrumentos formales suelen diseñarse bajo esquemas de pagos fijos y calendarios rígidos que ignoran la marcada estacionalidad de las actividades agropecuarias y la vulnerabilidad ante factores climáticos. Esta configuración estandarizada dialoga con lo señalado por Salgado Villavicencio (2018), quien retoma planteamientos sobre la naturaleza de la economía campesina, recordando que los flujos de efectivo en estos hogares suelen ser erráticos e irregulares. Durante la observación de estas interacciones, surge una fricción constante: mientras las instituciones esperan un comportamiento financiero lineal y predecible, las familias rurales estructuran su supervivencia a través de la pluriactividad, diversificando sus fuentes de ingreso para soportar los periodos de escasez, dinámicas que difícilmente logran encajar en los esquemas rígidos de los bancos.

Las dificultades operativas se profundizan al explorar las implicaciones físicas y económicas de acceder a estos servicios desde comunidades alejadas. Salgado Villavicencio (2018) documenta cómo la dispersión geográfica impone severos costos de transacción a los pequeños productores, quienes deben invertir recursos significativos en transporte y días de trabajo perdidos tan solo para acercarse a una sucursal o realizar un trámite. Almeraya-Quintero y otros (2011) señalan cómo el aislamiento de los núcleos rurales intensifica las disparidades socioeconómicas, donde al intentar adaptar los montos pequeños que requieren los campesinos a la infraestructura financiera urbana, los gastos indirectos terminan absorbiendo gran parte del préstamo o del ahorro, dejando sobre la mesa la interrogante de hasta qué punto el diseño operativo del financiamiento formal penaliza económicamente a quienes habitan fuera de las centralidades urbanas.

En la intersección de estas lógicas, el crédito agrícola institucional experimenta serias dificultades para

articularse con los ritmos de vida locales, porque la desconexión no se limita a una cuestión de distancia o de falta de garantías, sino que permea la concepción misma de la intermediación financiera formal (Campos, 2017). Al intentar imponer un modelo mercantil urbano sobre entramados sociales que responden a la necesidad de reproducir la vida y no a la simple acumulación de capital, el sistema formal termina propiciando el alejamiento voluntario o involuntario de las familias rurales. Estas cuestiones invitan a explorar con mayor detalle, cómo estas fricciones se materializan en barreras estructurales específicas, como las institucionales, tecnológicas y socioculturales, que terminan por asfixiar las iniciativas productivas y limitar las posibilidades de consolidar una economía social y solidaria desde la base comunitaria.

Al buscar responder cómo opera el sistema financiero formal en los territorios, toma forma una cartografía de las entidades estatales encargadas de proveer recursos. Para visualizar las características de esta red y las modalidades bajo las cuales entregan los fondos, se estructuraron las tablas 2 y 3, que adaptan la revisión de la arquitectura institucional y las lógicas de dispersión de crédito.

Tabla 2. *Arquitectura institucional de la banca de desarrollo vinculada al sector rural*

| Institución | Naturaleza de operación | Enfoque de intervención en el territorio |
|---|--------------------------------|--|
| Financiera Nacional de Desarrollo (FND) | Primer y segundo piso | Intenta otorgar crédito de forma directa a productores y a través de intermediarios financieros; suele exigir garantías prendarias o naturales (cosechas) basadas en la tenencia de la tierra. |
| Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) | Exclusivamente segundo piso | Canaliza financiamiento y ofrece garantías a través de intermediarios privados o entidades no bancarias, manteniendo requisitos estandarizados de evaluación de riesgo. |
| Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) | Primer y segundo piso | Focaliza sus procesos en la captación de ahorro, distribución de programas sociales y asistencia técnica a redes de cooperativas y cajas solidarias. |

Nota. Adaptado de las observaciones institucionales documentadas por Almeraya-Quintero y otros (2011) y Campos (2017).

En la reconstrucción de estos procesos organizacionales, Almeraya-Quintero y otros (2011) relatan que la política pública intentó subsanar la ausencia de la banca comercial desplegando entidades como FIRA, la FND y BANSEFI, buscando establecer puentes con las comunidades mediante esquemas directos o a través de intermediarios. Esta arquitectura dialoga con lo que establece Campos (2017), donde existen diversas complejidades de operar bajo lógicas de segundo piso, haciendo visible que el traslado de fondos hacia entidades dispersoras a menudo termina encareciendo los contratos o replicando los mismos filtros de exclusión patrimonial que impone la banca privada, donde se observa un desgaste en las relaciones de financiamiento,

Cruz, E., Lara, M.

porque al delegar el riesgo en intermediarios sin adaptar las normativas de fondo, las instituciones mantienen en suspenso la promesa de acercar los recursos a las materialidades irregulares de la vida campesina.

Tabla 3. *Fricciones operativas: diferencias entre esquemas de primer y segundo piso*

| Dimensión de la interacción | Esquemas de Primer Piso (Trato directo) | Esquemas de Segundo Piso (Trato intermediado) |
|---|--|--|
| Vínculo con el usuario | La institución del Estado interactúa directamente con el productor en sus agencias, lo que implica traslados físicos hacia las cabeceras regionales. | La relación es mediada por dispersoras, cajas o microfinancieras que actúan como puente entre el fondo estatal y la comunidad. |
| Gestión del riesgo y normativas | Evaluación sujeta a los manuales internos de la banca estatal, frecuentemente diseñados con escasa flexibilidad ante eventualidades climáticas o de mercado. | El riesgo financiero se traslada al intermediario local, quien para protegerse tiende a replicar exigencias de colaterales o a elevar las tasas de interés. |
| Articulación con formas colectivas | Asume al productor como un sujeto individual, dificultando el reconocimiento de avales sustentados en la palabra o el respaldo grupal. | Deja abierta la posibilidad de operar con grupos, aunque frecuentemente las intermediarias terminan priorizando la viabilidad mercantil individual sobre el tejido social. |

Nota. Elaborado a partir de las dinámicas de intermediación rural exploradas por Campos (2017).y Salgado Villavicencio (2018).

Las dinámicas descritas a partir de este diseño institucional sugieren que la exclusión financiera no radica únicamente en una cuestión de lejanía geográfica o falta de sucursales, sino en un choque profundo en las formas de relacionarse con el entorno productivo. Al intentar superponer un modelo operativo estandarizado, es decir, basado en lógicas mercantiles, ya sea en primer o segundo piso, sobre entramados sociales que organizan su subsistencia a través de la reciprocidad y la economía solidaria, el sistema formal asoma límites evidentes (Salgado Villavicencio, 2018). Estas tensiones invitan a explorar con mayor detenimiento, la forma en que este desencuentro general se materializa en las barreras estructurales específicas, como las institucionales, tecnológicas y socioculturales, que experimentan los grupos locales cotidianamente al intentar consolidar sus proyectos, dando paso al tercer apartado de estas reflexiones.

3. Barreras estructurales que limitan el fortalecimiento de la ESS

Al observar las dificultades cotidianas que experimentan las iniciativas locales para sostenerse en el tiempo, surge la inquietud de situar estas complicaciones más allá de las decisiones aisladas de las familias campesinas.

Al intentar aproximarse a este fenómeno, cobra sentido retomar la noción de barreras estructurales. Rocha Sánchez y Cruz del Castillo (2013) discuten este concepto al reconstruir las limitaciones sociales y culturales que derivan de factores ideológicos e institucionales prevaletentes, los cuales organizan la vida diaria y condicionan de antemano el acceso a recursos. Este planteamiento dialoga orgánicamente con los registros de Romero Cruz (2026), donde se evidencia que, en el entorno agrícola, la carencia de infraestructura y la ausencia prolongada de financiamiento no operan como incidentes pasajeros, sino como condiciones estructurales persistentes que restringen la autonomía local. La exclusión financiera no responde a una supuesta incapacidad de los grupos, sino a un entramado de obstáculos instaurados desde el exterior que limitan severamente la reproducción de las prácticas de la economía social y solidaria.

Para intentar reconstruir la complejidad de estas fricciones en la materialidad del territorio, la exclusión se entrelaza a partir de distintos frentes que actúan de manera simultánea (Campos, 2017; Salgado Villavicencio, 2018), motivo por el cual la exploración de este apartado se organiza en torno a tres dimensiones. En un primer momento, las barreras institucionales y normativas, donde el diseño rígido de las políticas públicas choca con la organización comunitaria, una tensión que se relaciona de cerca con lo señalado por Campos (2017) sobre los vacíos operativos del sistema formal. Estas dificultades se profundizan al interactuar con las barreras tecnológicas y geográficas, un ámbito en el que Esparza Gallegos y otros (2024) relatan cómo la profunda brecha digital y la dispersión territorial aíslan a las comunidades de los mecanismos modernos de gestión.

A la par de estas limitaciones materiales, también se hacen visibles barreras de corte sociocultural que permean las interacciones cotidianas. Domínguez Borbón (2018) en torno a grupos indígenas y las observaciones de Romero Cruz (2026) en contextos rurales muestran cómo la desconfianza histórica hacia las figuras gubernamentales, sumada al envejecimiento del campo y las tensiones internas, configuran un tejido social receloso ante la intervención externa. El recorrido conjunto por estas tres dimensiones intenta no aislar el problema, sino mostrar cómo operan en bloque, dejando sobre la mesa interrogantes sobre la fragilidad y los límites que experimentan las redes de economía solidaria al intentar navegar por este escenario de vulnerabilidad múltiple.

3.1. Barreras Institucionales y Normativas

En relación con la arquitectura institucional del financiamiento rural, la proliferación de normativas y figuras jurídicas configura un escenario burocrático que frecuentemente rebasa las capacidades de las iniciativas locales. Campos (2017) analiza cómo la creación de marcos legales diferenciados, particularmente la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, introduce exigencias operativas complejas que terminan fragmentando el entorno de las microfinanzas. Al aproximarse a estas dinámicas organizacionales, Romero Cruz (2026) relaciona estas restricciones institucionales con las dificultades históricas que experimentan los pequeños productores para consolidar sus proyectos colectivos en el tiempo, porque existen tensiones cotidianas sobre cómo las comunidades intentan navegar entre múltiples reglas de operación y dependencias gubernamentales que, de acuerdo con Campos (2017), carecen de coordinación entre sí, dejando abiertas interrogantes acerca de la viabilidad de la autogestión frente a un diseño estatal denso y segmentado.

Con respecto a las exigencias regulatorias, las normativas orientadas a la seguridad del sistema financiero imponen cargas económicas severas a las pequeñas sociedades solidarias. Campos (2017) describe, en

Cruz, E., Lara, M.

particular, los requerimientos derivados de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los cuales obligan a todas las entidades, sin importar la escala de sus operaciones, a certificar a sus oficiales de cumplimiento mediante evaluaciones estandarizadas. Esta situación alude a una asimetría profunda, porque el marco legal solicita los mismos perfiles profesionales y estándares de evaluación a una caja solidaria campesina que a un banco comercial de alcance internacional, donde se observa el desgaste de las organizaciones al intentar costear estos exámenes y contratar personal con nivel de licenciatura en zonas rurales donde dichos perfiles escasean, sugiriendo un escenario donde la homogeneización normativa asfixia operativamente a las prácticas de la economía social.

A causa de este marco regulatorio inflexible, emergen efectos colaterales que aíslan aún más a las redes de financiamiento de base comunitaria. Campos (2017) enfatiza cómo la banca comercial, ante las presiones institucionales por el estricto control de operaciones, ha optado por cerrar masivamente las cuentas bancarias de las sociedades financieras comunitarias y cooperativas rurales, incluso en los casos donde estas cumplen con todas las normativas de prevención. De igual modo, el cobro de multas estandarizadas impuestas por las autoridades ante faltas administrativas representa, para una pequeña caja rural, una pérdida drástica de sus activos totales, en contraste con el daño mínimo que la misma sanción genera en una institución bancaria urbana (Campos, 2017). En este contexto de vulnerabilidad, el diseño mismo de la política financiera relega a los márgenes a las estructuras autogestionadas, manteniendo en suspenso las posibilidades de consolidar esquemas cooperativos cuando el ecosistema regulatorio castiga económicamente su existencia.

3.2. Barreras Tecnológicas y Geográficas

Al explorar la dispersión geográfica de los territorios agrícolas, la distancia física se materializa con cargas económicas para las familias campesinas. Almeraya-Quintero y otros (2011) relacionan la deficiente provisión de infraestructura y servicios con la intensificación del aislamiento en los núcleos rurales, lo cual profundiza las disparidades frente a los centros urbanos, lo que coincide con lo expuesto por Salgado Villavicencio (2018), quien subraya que los gastos de transacción, derivados del traslado continuo hacia las sucursales, operan frecuentemente como el obstáculo central para el acercamiento a los mecanismos financieros formales. En esta misma línea, Campos (2017) retoma cómo la baja densidad poblacional impone altos costos operativos tanto para las instituciones como para los usuarios, planteando interrogantes acerca de las posibilidades de sostener interacciones cotidianas y fluidas en regiones donde la infraestructura vial resulta precaria.

Las iniciativas institucionales que intentan superar estas distancias territoriales mediante la digitalización entran en conflicto con las materialidades de la vida en el campo. Durante la revisión del caso de la comunidad de El Chante, en Jalisco, Esparza Gallegos y otros (2024) documentan cómo la profunda brecha digital restringe las interacciones con los sistemas bancarios modernos; puede reconocerse que una proporción significativa de los habitantes carece de conocimientos para operar equipos tecnológicos básicos como una computadora o navegar en plataformas virtuales. Esta situación se entrelaza con lo señalado por Campos (2017) respecto a la conectividad intermitente y la ausencia de teléfonos móviles propios en amplias franjas de la población rural, configurando un escenario donde la tecnología, en lugar de fungir como puente, opera como un filtro de exclusión adicional. En los relatos de El Chante, aparecen comentarios sobre la fuerte dependencia de transportes públicos con horarios rígidos que tienden a duplicar los tiempos de traslado hacia zonas urbanas (Esparza Gallegos y otros, 2024), lo que sugiere que la lejanía física se agrava ante la imposibilidad de sustituir

los viajes físicos con gestiones en línea.

En estas dinámicas, toma forma una tensión persistente entre el diseño de los canales de atención financieros y los ritmos del territorio. Domínguez Borbón (2018) aborda esta fricción al explorar las dificultades en las comunidades indígenas de la Tribu Yaqui, señalando que los intentos externos por introducir servicios financieros mediante dispositivos móviles entran en conflicto directo con la falta de infraestructura eléctrica adecuada y la ausencia de redes de internet estables en las zonas de mayor marginación. Esta situación coincide con lo planteado por Campos (2017), donde se sugiere que la instalación aislada de tecnologías urbanas, como cajeros automáticos o terminales de punto de venta, experimenta complicaciones al no responder a la irregularidad de los ingresos rurales y a los altos costos por comisión. El desarrollo de estos procesos deja abiertas cuestiones sobre la fragilidad de las redes de economía solidaria cuando intentan interactuar con un entorno formal que asume la alfabetización digital y la conectividad ininterrumpida como condiciones dadas, relegando a quienes habitan en la periferia de las telecomunicaciones.

3.3. *Barreras Socioculturales*

Al explorar la interacción entre las comunidades y las instituciones de financiamiento, la exclusión no sólo responde a carencias tecnológicas o normativas, sino a un tejido histórico de desconfianza. En la reconstrucción de las experiencias de la Tribu Yaqui en Sonora, Domínguez Borbón (2018) describe cómo los intentos previos de inserción financiera gubernamental, particularmente durante las décadas de los ochenta y noventa con el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), dejaron una fractura porque durante esos años, la entrega de maquinaria agrícola sin la capacitación técnica requerida y la imposición de intermediarios ajenos a las estructuras tradicionales de autoridad derivaron en un endeudamiento generalizado, manteniendo hasta tiempos recientes a una gran proporción de la población en cartera vencida. Estas intervenciones, percibidas en el territorio como imposiciones externas, sugieren que la reticencia hacia los bancos y programas oficiales opera como una respuesta acumulada frente a prácticas que históricamente han ignorado las lógicas locales, planteando como desafío pendiente la cuestión de cómo se repara un vínculo institucional tan desgastado.

Estas fricciones externas suelen entrelazarse con asimetrías y conflictos al interior de los propios grupos, complejizando la adopción de esquemas solidarios o de crédito grupal. Siguiendo al mismo autor, se advierte la dificultad para establecer acuerdos sobre riesgos y responsabilidades compartidas entre los gobernantes de los pueblos tradicionales, lo que en ocasiones fragmenta la viabilidad de proyectos económicos conjuntos. Ante la escasez de recursos y la falta de un soporte financiero adaptado a sus usos y costumbres, se presentan situaciones donde las familias se ven empujadas a rentar sus tierras a terceros, a pesar del potencial productivo de sus parcelas (Domínguez Borbón, 2018). En estas dinámicas, las brechas de información y la ausencia de figuras financieras de proximidad configuran un escenario de vulnerabilidad, asomando interrogantes sobre la fragilidad de las estructuras organizativas cuando se ven presionadas por un entorno mercantil discontinuo e irregular.

En las comunidades rurales de Tabasco, las barreras socioculturales toman forma a través de dinámicas demográficas que reconfiguran la vida cotidiana de las familias. Romero Cruz (2026) expone cómo el progresivo envejecimiento de la población agrícola y la constante migración de los jóvenes hacia otros centros de trabajo interrumpen la transferencia del conocimiento y complican la sucesión en la tenencia de la tierra, donde la resistencia a modificar ciertas prácticas tradicionales interactúa con la falta de un relevo generacional,

Cruz, E., Lara, M.

lo que limita la capacidad de las iniciativas locales para articularse con esquemas de financiamiento externo o diversificar sus canales de comercialización. Estos territorios son un campo envejecido donde la exclusión social y las presiones económicas se superponen, dejando abiertas reflexiones sobre hasta qué punto las estrategias de economía solidaria logran sostenerse en espacios donde la continuidad misma de la unidad campesina se encuentra comprometida.

Al organizar la información sobre la arquitectura regulatoria, se estructuró la Tabla 4 para intentar visualizar las dificultades burocráticas que experimentan las organizaciones en el territorio. En la revisión de estos marcos, Campos (2017) expone cómo la creación de leyes diferenciadas y las estrictas normativas de prevención de lavado de dinero fragmentan el entorno de las microfinanzas. Este escenario se desarrolla en los trabajos de Salgado Villavicencio (2018), quien describe que la evaluación financiera estandarizada se enfrenta con los regímenes de propiedad social, mostrando las tensiones cotidianas en las que el diseño gubernamental asfixia económicamente a las pequeñas iniciativas de economía solidaria.

Tabla 4. *Dimensiones institucionales y normativas que restringen el financiamiento rural*

| Factor sociocultural | Experiencia en la comunidad | Consecuencia en el tejido social |
|--|--|---|
| Memoria de intervenciones externas | Imposiciones previas sin capacitación, como las experimentadas históricamente con programas crediticios estatales. | Desconfianza hacia instituciones gubernamentales y reticencia a asumir nuevas deudas formales. |
| Envejecimiento agrícola y migración | Salida de jóvenes hacia otros centros de trabajo e interrupción del relevo generacional. | Fragilidad en la continuidad de los proyectos productivos locales y en la innovación comercial. |
| Asimetrías y conflictos internos | Dificultades para establecer acuerdos sobre responsabilidades compartidas entre autoridades | Fragmentación en la viabilidad de esquemas solidarios o fondos rotatorios basados en la |

Nota. Elaborado a partir de Campos (2017) y Salgado Villavicencio (2018).

La dimensión espacial y de infraestructura se sintetiza en la Tabla 5, donde en comunidades de Jalisco, Esparza Gallegos y otros (2024) documentaron el peso del analfabetismo digital en la interacción con los servicios bancarios modernos. A su vez, las revisiones de Domínguez Borbón (2018) en la Tribu Yaqui abordan la escasez de redes de conectividad estables, lo que se relaciona con los trabajos de Almeraya-Quintero y otros (2011) sobre el aislamiento geográfico, configurando un filtro que agrava la lejanía física al imposibilitar las transacciones a distancia.

Tabla 5. *Limitaciones tecnológicas y geográficas en el acceso a servicios financieros*

| Dimensión tecnológica/geográfica | Condición en el entorno rural | Implicaciones operativas |
|--|--|---|
| Brecha digital y educativa | Desconocimiento del uso de equipos de cómputo, plataformas virtuales o cajeros automáticos. | Imposibilidad de sustituir traslados físicos con gestiones en línea o aplicaciones móviles. |
| Infraestructura de telecomunicaciones | Conectividad intermitente, falta de redes de internet estables y ausencia de dispositivos propios. | Fricciones severas en la instalación de terminales de punto de venta en pequeños comercios. |
| Dispersión territorial | Largas distancias hacia los polos de desarrollo, dependientes de transportes públicos rígidos. | Incremento de los costos de transacción que absorben los montos pequeños de ahorro o crédito. |

Nota. Elaborado a partir de Almeraya-Quintero y otros (2011), Esparza Gallegos y otros (2024) y Domínguez Borbón (2018).

Para plasmar las relaciones históricas y los cambios demográficos, se elaboró la Tabla 6. Las descripciones de Domínguez Borbón (2018) sobre el desgaste organizativo derivado de intervenciones institucionales fallidas coinciden con las observaciones de Romero Cruz (2026) acerca del envejecimiento del campo en Tabasco. En estas interacciones puede identificarse cómo la desconfianza acumulada, sumada a la interrupción en la transferencia de la tierra hacia las nuevas generaciones, complejiza severamente la formación de esquemas de trabajo conjunto.

Tabla 6. *Fricciones socioculturales y demográficas en la interacción financiera*

| Factor sociocultural | Experiencia en la comunidad | Consecuencia en el tejido social |
|--|--|---|
| Memoria de intervenciones externas | Imposiciones previas sin capacitación, como las experimentadas históricamente con programas crediticios estatales. | Desconfianza hacia instituciones gubernamentales y reticencia a asumir nuevas deudas formales. |
| Envejecimiento agrícola y migración | Salida de jóvenes hacia otros centros de trabajo e interrupción del relevo generacional. | Fragilidad en la continuidad de los proyectos productivos locales y en la innovación comercial. |

Cruz, E., Lara, M.

| | | |
|---|--|--|
| Asimetrías y conflictos internos | Dificultades para establecer acuerdos sobre responsabilidades compartidas entre autoridades tradicionales. | Fragmentación en la viabilidad de esquemas solidarios o fondos rotatorios basados en la confianza. |
|---|--|--|

Nota. Elaborado a partir de Domínguez Borbón (2018) y Romero Cruz (2026).

En la Tabla 7 se expone la vulnerabilidad múltiple que rodea a las organizaciones locales, donde en las diferentes regiones estas barreras actúan en bloque, planteando interrogantes sobre las posibilidades de sostener prácticas de reciprocidad económica cuando el entorno formal exige comportamientos ajenos a las dinámicas del territorio (Campos, 2017; Salgado Villavicencio, 2018).

Tabla 7. *Efectos integrados de las barreras estructurales en la Economía Social y Solidaria*

| Dimensión de la barrera | Interacción con la Economía Social y Solidaria | Resultado material en el territorio |
|--------------------------------|---|--|
| Institucional | Somete a las cajas solidarias y cooperativas a reglas financieras diseñadas para la banca comercial urbana. | Relegación de las estructuras autogestionadas ante la asfixia por multas y cierres de cuentas. |
| Tecnológica | Asume la digitalización y la conectividad ininterrumpida como un requisito básico de operación. | Aislamiento económico de las redes de comercio local que carecen de infraestructura. |
| Sociocultural | Desconoce los tiempos, las formas de organización y la desconfianza histórica de las familias rurales. | Desgaste del aval comunitario y dificultad para escalar los fondos de ahorro populares. |

Nota. Elaborado a partir de Campos (2017) y Salgado Villavicencio (2018).

En la reconstrucción conjunta de estas dimensiones, surge un panorama donde las iniciativas locales navegan por un escenario de fricciones que rebasan su voluntad de cooperación. El diseño mismo de los mecanismos formales insiste en superponer lógicas mercantiles sobre tejidos sociales que priorizan la reproducción de la vida comunitaria, dejando abiertas severas tensiones sobre la autonomía rural. Existe un sistema que es rígido porque en la práctica cotidiana, penaliza la propiedad de uso común, castiga financieramente a las pequeñas organizaciones de ahorro y desconoce las distancias materiales del campo. Estas dinámicas mantienen en suspenso la viabilidad de los esfuerzos autogestionados cuando intentan interactuar con la arquitectura de la política pública.

Frente a este entorno de exclusión histórica y operativa, existen experiencias en el territorio que intentan superar estas limitaciones apoyándose en sus propios medios, donde se observa cómo algunas organizaciones y redes cooperativas construyen metodologías particulares para adaptar el financiamiento a sus materialidades. Estas configuraciones invitan a su reflexión en el siguiente apartado, enfocado en examinar los modelos

locales que buscan, a través de la economía social y solidaria, abrir alternativas habitables frente a las barreras estructurales previamente descritas.

4. Superando las barreras: Modelos de éxito de la ESS

En las respuestas locales frente a las múltiples limitaciones institucionales y territoriales, toman relevancia las iniciativas que intentan configurar esquemas económicos trazados desde la propia base comunitaria, donde Felipe Giraldo (2025) propone acercarse a los colectivos rurales no desde la escasez o la carencia que asume el sistema financiero tradicional, sino desde la abundancia de sus vínculos, saberes y redes de ayuda mutua. Esta postura es respaldada por Salgado Villavicencio (2018), donde hace visible que los sectores excluidos de la banca comercial suelen ensayar arreglos de capital compartido sustentados en la presión solidaria y el trabajo conjunto. El “valor de vínculo” intenta sustituir al colateral prendario, pero no está exento de fricciones constantes sobre las capacidades reales de la autogestión para resistir las presiones individualizantes de un entorno regido por el mercado.

En estas trayectorias organizativas, aparece una particularidad en la forma en que los grupos intentan superar la exclusión: la conversión de una necesidad colectiva en un espacio para la organización comunitaria. Felipe Giraldo (2025) muestra cómo diversas redes territoriales buscan construir sus propios satisfactores como el ahorro, comercialización, abasto, apoyándose en la densidad de su tejido social y en mecanismos de democracia directa. Esta perspectiva converge con las reflexiones de Álvarez Castañón y otros (2011) en torno a las intervenciones comunitarias, al sugerir que cualquier intento de inserción financiera que no logre articularse con las dimensiones culturales, las tradiciones y los ritmos de la población local tiende a fracturar la identidad de los pueblos. En estas interacciones, el manejo autogestionado de los recursos sugiere un intento por mantener la autonomía sobre los medios de vida; sin embargo, quedan latentes interrogantes sobre el desgaste que experimentan las asambleas locales al tener que asumir responsabilidades técnicas y administrativas cada vez más complejas.

Al intentar comprender la materialidad de estos esfuerzos desde una mirada reflexiva, se hace difícil mantener una visión exenta de contradicciones. Gómez Rodríguez y Barbosa Pérez (2023) exponen que las prácticas de la economía solidaria, aunque buscan sostener intercambios horizontales y anclados en el territorio, experimentan tensiones continuas al interactuar con las lógicas y asimetrías de los sistemas agroalimentarios convencionales. Esto se relaciona con lo señalado por Salgado Villavicencio (2018) respecto a la vulnerabilidad de las metodologías basadas en la confianza, porque el aval social y el compromiso moral del grupo solidario pueden verse rebasados cuando las familias enfrentan crisis climáticas prolongadas o emergencias económicas severas. El sostenimiento de estos modelos se presenta no como un logro definitivo frente a las barreras estructurales, sino como un proceso irregular, inacabado y frágil.

Estas dinámicas mantienen en suspenso la cuestión de los límites de la acción colectiva e invitan a explorar, cómo ciertas experiencias específicas en el territorio intentan materializar estas alternativas de financiamiento cooperativo lidiando cotidianamente con dichas tensiones.

4.1. El caso Tosepantomin (Puebla)

Al aproximarse a las respuestas construidas desde los propios territorios, surge la trayectoria de la cooperativa Tosepantomin, asentada en la Sierra Nororiental de Puebla. Felipe Giraldo (2025) describe como un esfuerzo

Cruz, E., Lara, M.

sostenido por convertir las carencias comunitarias en espacios de organización local, logra agrupar gradualmente a decenas de miles de familias nahuas y totonacas. Estas observaciones convergen con la reconstrucción de los procesos documentados por Salgado Villavicencio (2018), en los que puede identificarse que la iniciativa surge frente a un panorama de exclusión bancaria prolongada y como un mecanismo de defensa ante los altos niveles de usura impuestos por los prestamistas locales. Durante la exploración de estos casos, resulta particular cómo una estructura autogestionada intenta movilizar recursos desde la base hasta alcanzar la integración de aproximadamente 35,000 socios (Salgado Villavicencio, 2018), configurando un entramado que busca sostener las actividades campesinas lidiando cotidianamente con un entorno regido por lógicas mercantiles.

En la materialidad de sus operaciones, surgen dinámicas particulares para intentar sortear las barreras geográficas e infraestructurales descritas en los apartados anteriores. Salgado Villavicencio (2018) describe el papel central de los promotores comunitarios bilingües, figuras locales que se desplazan directamente hacia las localidades alejadas para recolectar los ahorros y registrar los abonos in situ, intentando diluir los severos costos de transacción y traslado que tradicionalmente asfixian a los pequeños productores. Esta aproximación operativa se relaciona con los planteamientos de Felipe Giraldo (2025) en torno a la regeneración de los vínculos, porque la interacción financiera no se da de manera despersonalizada en una ventanilla urbana, sino a través de actores que comparten el entorno cultural y lingüístico de los grupos. No obstante, están presentes fricciones relacionadas con la responsabilidad técnica y moral que recae sobre los promotores, dejando abiertas interrogantes sobre la fragilidad de un sistema de escala regional que reposa casi por completo en la confianza depositada en individuos específicos para el manejo físico del dinero.

Al revisar las exigencias para la entrega de fondos, toma forma un contraste profundo con las normativas prendarias del sistema financiero formal. Salgado Villavicencio (2018) relata que el diseño de los préstamos en Tosepantomín intenta sostenerse sobre la conformación de grupos solidarios y el fomento del ahorro continuo, donde el requerimiento central no es un título de propiedad privada, sino el aval social y el compromiso conjunto de los pares. Este esquema de corresponsabilidad es retomado por Felipe Giraldo (2025) sobre las economías vernáculas y el valor de vínculo, sugiriendo que las familias buscan proteger su patrimonio apoyándose en la presión social del grupo frente a los riesgos del endeudamiento. Sin embargo, en las descripciones de estas interacciones también aparecen tensiones latentes; las dinámicas del aval solidario sugieren que, frente a crisis agrícolas severas o contingencias económicas prolongadas, los grupos experimentan un fuerte desgaste interno, asomando los límites del apoyo mutuo cuando las emergencias materiales rebasan la capacidad de respuesta y contención de la propia comunidad.

4.2. El caso Solución ASEA (Chiapas)

Otro caso donde se intentan hacer frente a las barreras geográficas y operativas, es la organización Solución ASEA en el sureste de México, particularmente en el estado de Chiapas. Álvarez Castañón y otros (2011), muestran como se advierte un esfuerzo por superar el aislamiento espacial mediante la instalación de “minisucursales” operadas desde los propios comercios de las localidades. Esta configuración se relaciona con las inquietudes de Campos (2017) respecto a la desconexión física de la banca, donde en lugar de exigir el traslado de las familias hacia las sucursales en las cabeceras municipales, el modelo ensaya la mediación financiera a través de actores comerciales que ya forman parte de la cotidianidad de los poblados. Durante la revisión de este esquema, está presente un entramado donde las plataformas tecnológicas intentan anclarse en la proximidad del tendero local,

dejando abiertas interrogantes sobre cómo se reconfiguran las dinámicas de reciprocidad cuando un vecino asume el rol de intermediario financiero de la comunidad.

Al intentar reconstruir la materialidad de estas interacciones, cobran relevancia las fricciones económicas derivadas directamente de la dispersión territorial. Álvarez Castañón y otros (2011) relatan la experiencia en la comunidad de Independencia, donde el trayecto hacia la zona urbana más cercana imponía a los campesinos un gasto en transporte que frecuentemente absorbía los pequeños montos destinados al ahorro o al pago de un préstamo. Frente a este escenario adverso, la operación a través de las minisucursales sugiere una modificación en las cargas económicas cotidianas, visibilizando casos donde el costo transaccional experimenta disminuciones de hasta un 94% al sustituir el pasaje de autobús por una comisión mínima abonada en la tienda del pueblo. Estas observaciones retoman planteamientos explorados previamente sobre la economía campesina, al sugerir que la viabilidad de los intercambios no depende de manera exclusiva del diseño formal del crédito, sino de la supresión de los gastos indirectos. Sin embargo, en estas prácticas aparecen cuestiones latentes sobre la fragilidad de estas infraestructuras cuando la conectividad intermitente o la falta de liquidez del propio comercio enfrentan interrupciones.

En las narrativas sobre este acercamiento, existen también tensiones respecto a los límites de la provisión tecnológica frente a la complejidad del tejido social. Álvarez Castañón y otros (2011) reflexionan sobre las implicaciones de transitar desde una intervención estrictamente financiera hacia una de carácter social, sugiriendo que la simple instalación de dispositivos de cobro corre el riesgo de fracturar las dinámicas locales si no logra articularse con los ritmos culturales de la región, porque al seguir estos procesos, se observa que el uso de tarjetas y terminales en entornos indígenas intenta sobreponerse a la desconfianza histórica, pero en ocasiones genera nuevas fricciones vinculadas con la alfabetización tecnológica de los usuarios de mayor edad. El desenvolvimiento de estas experiencias deja sobre la mesa la interrogante de hasta qué punto la cercanía física y la reducción de costos transaccionales logran consolidar prácticas de apoyo mutuo a largo plazo, o si estas configuraciones enfrentan el riesgo de operar únicamente como canales de dispersión de recursos que mantienen intactas las asimetrías de información en los territorios rurales.

Finalmente, se estructuraron dos tablas para visualizar las configuraciones de estos esquemas autogestionados y las formas en que interactúan con las condiciones cotidianas de las familias. La Tabla 8 retoma los registros elaborados en torno a la arquitectura de estas iniciativas comunitarias, mostrando un contraste operativo frente a los modelos formales descritos en apartados previos.

Tabla 8. *Configuraciones de modelos alternativos de financiamiento territorial*

| Modelo de financiamiento | Sujeto y respaldo de la interacción | Fricciones y límites observados |
|---|--|---|
| Cajas de ahorro y cooperativas indígenas | Sujeto colectivo; el aval se sostiene en el compromiso grupal, la asamblea y la confianza comunitaria. | Desgaste de las relaciones internas ante crisis prolongadas; dificultades para escalar sin asfixia regulatoria. |

Cruz, E., Lara, M.

| | | |
|--|--|--|
| Redes de mediación comercial (Minisucursales) | Anclado en la proximidad de los comercios locales; sustituye el traslado físico hacia zonas urbanas. | Fuerte dependencia de la intermitencia tecnológica y riesgo latente de fracturar dinámicas comunitarias. |
| Fondos rotatorios y de ayuda mutua | Organización desde la base familiar para homogeneizar el consumo en periodos de escasez agrícola. | Los recursos colectivos a menudo resultan insuficientes cuando el grupo enfrenta contingencias climáticas severas. |

Nota. Elaborador a partir de Álvarez Castañón y otros (2011), Felipe Giraldo (2025) y Salgado Villavicencio (2018).

Durante la revisión de estas prácticas, toma relevancia la inquietud por comprender cómo estas dinámicas interactúan con el entorno familiar de quienes participan. Para aproximarse a esta dimensión, la Tabla 9 sintetiza las percepciones sobre las modificaciones materiales en la vida de los hogares rurales.

Tabla 9. *Tensiones y percepciones sobre los efectos en la vida cotidiana*

| Dimensión del entorno | Manifestación en el territorio | Cuestiones latentes en la comunidad |
|----------------------------------|--|---|
| Ingresos y pluriactividad | Sensación de incrementos moderados en regiones donde los socios diversifican sus actividades económicas con oficios adicionales. | Diferencias marcadas entre zonas geográficas; en áreas estrictamente agrícolas, la mejora se percibe como marginal o nula. |
| Consumo y salud | Uso de los fondos autogestionados para estabilizar el gasto en alimentos básicos y cubrir emergencias médicas inmediatas. | Cuestionamientos sobre si estos recursos logran sostener a las familias frente a enfermedades de alto costo o periodos largos de improductividad. |
| Mantenimiento de vivienda | Adquisición de montos pequeños para autoconstrucción progresiva, reparación de techos o instalación de servicios básicos. | Los recursos suelen percibirse como insuficientes para edificar viviendas nuevas, limitándose a arreglos menores y escalonados. |

Nota. Elaborado a partir de Salgado Villavicencio (2018).

En las descripciones integradas en estas tablas, se hace visible que la interacción con la economía solidaria no opera de manera uniforme ni produce transformaciones lineales. Salgado Villavicencio (2018) señala que en las diferentes sucursales de la sierra dialogan de cerca con esta irregularidad, al notar que la percepción en los hogares suele relacionarse estrechamente con la pluriactividad. En aquellos espacios donde las familias logran combinar la siembra con oficios adicionales como la carpintería o el comercio, los mecanismos de las cooperativas parecen acompañar de manera más fluida sus ritmos de supervivencia; en contraste, en las regiones con alta dependencia de un solo cultivo temporal, las narrativas asoman una percepción de mayor vulnerabilidad. Estas interacciones se relacionan con los planteamientos de Romero Cruz (2026) respecto a la complejidad de sostener la vida diaria, sugiriendo que la herramienta financiera comunitaria, aunque valiosa, experimenta límites profundos para revertir, por sí sola, condiciones de marginación que tienen raíces históricas.

En todos estos apartados, se muestra un panorama en el que la economía social y solidaria intenta abrir y defender espacios habitables en medio de un entorno altamente adverso. Las prácticas de reciprocidad, el multitrueque y la organización en asambleas sugieren un esfuerzo incesante por parte de los grupos agrícolas para mantener el control sobre sus procesos productivos y sostener la densidad de su tejido relacional (Felipe Giraldo, 2025). Sin embargo, en estas experiencias también se hicieron visibles fricciones al enfrentarse con un diseño institucional que insiste en superponer reglas de operación urbanas, exigencias de propiedad individual y digitalizaciones homogeneizantes sobre territorios dispersos. El desenvolvimiento de estas tensiones expone cómo las barreras normativas, tecnológicas y socioculturales actúan en bloque, castigando económicamente a las estructuras autogestionadas al momento en que intentan articularse con la arquitectura de la política pública (Campos, 2017).

A modo de cierre, es importante cuestionar el desencuentro entre las normativas estatales y la materialidad del mundo rural. Las dinámicas documentadas invitan a pensar en las implicaciones de un sistema formal que ignora la propiedad de uso común, penaliza la irregularidad de los ingresos campesinos y desconoce las asimetrías históricas. Al articular estas perspectivas, surge la inquietud sobre las posibilidades de generar configuraciones gubernamentales que logren adaptarse a la diversidad de las lógicas comunitarias, en lugar de forzar a los pueblos a encajar en moldes mercantiles restrictivos. Estas cuestiones sugieren que la supervivencia de los proyectos locales no depende únicamente de la capacidad de resistencia de sus integrantes, sino en la manera en que el entorno externo logre flexibilizar las estructuras que históricamente han condicionado su desarrollo.

Conclusiones

El recorrido analítico desarrollado a lo largo de este artículo permite retomar el objetivo planteado inicialmente, enfocado en explorar las barreras estructurales del crédito agrícola en los territorios rurales e indígenas. Al analizar las interacciones entre el diseño de la política pública, la arquitectura financiera y las formas de organización económica local, se hace evidente que la exclusión no responde a una supuesta incapacidad, analfabetismo o déficit organizativo de las comunidades. Por el contrario, las limitaciones derivan de un andamiaje institucional que históricamente ha superpuesto reglas operativas urbanas y de propiedad individual sobre dinámicas sostenidas en el trabajo colectivo y la tenencia social de la tierra (Salgado Villavicencio, 2018). En este ejercicio de revisión, el sistema formal se presenta como una estructura que frecuentemente

Cruz, E., Lara, M.

castiga las formas de vida comunitarias al exigir comportamientos estrictamente mercantiles, manteniendo abierta la interrogante sobre las verdaderas posibilidades de apropiación de estos instrumentos externos frente a lógicas estatales tan rígidas.

Al examinar el desencuentro entre ambos mundos, toma forma un escenario de vulnerabilidad múltiple donde las dimensiones institucionales, tecnológicas y socioculturales actúan en bloque para restringir la autonomía productiva. La exigencia de garantías patrimoniales y la fragmentación de los programas gubernamentales se entrelazan con una profunda brecha digital y la desconfianza acumulada tras décadas de políticas fallidas e imposiciones externas (Campos, 2017; Domínguez Borbón, 2018). Dentro de este entramado de fricciones, la intermediación financiera impuesta por las entidades estatales suele operar como un filtro que individualiza el acceso a los recursos, desgastando el capital social y penalizando los altos costos de transacción que impone el aislamiento geográfico (Almeraya-Quintero y otros, 2011; Esparza Gallegos y otros, 2024). Estas dinámicas sugieren que el diseño del crédito institucional experimenta una incompatibilidad de raíz con la materialidad campesina, la cual orienta sus esfuerzos hacia la reproducción de la vida familiar y no hacia la maximización utilitaria.

Frente a esta exclusión sistematizada, la Economía Social y Solidaria trasciende la categoría de una simple resistencia o una alternativa temporal ante la ausencia de sucursales bancarias, porque al apoyarse en la densidad de su tejido relacional y en el “valor de vínculo” para sustituir al colateral prendario, la autogestión y el ahorro colectivo se configuran como el modelo más viable y pertinente para asegurar la supervivencia y el desarrollo a largo plazo del mundo rural (Felipe Giraldo, 2025). Las experiencias territoriales que logran acortar las cadenas de comercialización y establecer mecanismos propios de financiamiento demuestran una capacidad superior para homogeneizar el consumo en tiempos de escasez y sostener la soberanía alimentaria, todo ello mediante relaciones de reciprocidad (Gómez Rodríguez & Barbosa Pérez, 2023; Romero Cruz, 2026). La consolidación de estas prácticas sugiere que la superación de las barreras estructurales no radica en forzar a los pueblos a encajar en un molde capitalista individualizante, sino en reconocer y fortalecer los sistemas socioecológicos comunitarios como los verdaderos motores de resiliencia frente a la incertidumbre económica y climática.

En este documento se describieron algunas de las limitaciones del crédito agrícola, donde es importante reconocer las fronteras analíticas del presente trabajo y los vacíos que invitan a futuras exploraciones. Durante el desarrollo de esta revisión no se profundizó en las implicaciones psicológicas ni en las tensiones intra-familiares que genera el endeudamiento institucional o la participación en esquemas solidarios, particularmente en la vida de las mujeres rurales. Al respecto, Rocha Sánchez y Cruz del Castillo (2013) advierten que la transgresión de roles tradicionales para acceder a recursos y participar en el mundo público suele traducirse en dobles o triples jornadas que incrementan el estrés y el malestar emocional, una dimensión subjetiva que requiere ser evaluada a fondo mediante investigaciones longitudinales.

Por otra parte, si bien se abordó tangencialmente la brecha digital, queda pendiente una revisión crítica sobre la viabilidad a largo plazo de las plataformas tecnológicas financieras (Fintech) y los esquemas de dinero electrónico impulsados gubernamentalmente en territorios que carecen de conectividad estable; un aspecto que Campos (2017) identifica como un terreno propenso a agravar la exclusión si las intervenciones se centran en la tecnología sin acompañarse de un diseño de servicios adecuado a la materialidad campesina. Estas ausencias sugieren que los futuros acercamientos académicos y gubernamentales deberían adoptar un enfoque

multidisciplinario que integre la sociología, la antropología y la psicología, por mencionar algunas disciplinas, para lograr transitar de una simple medición de la profundización financiera hacia la comprensión de una intervención social holística (Álvarez Castañón y otros, 2011).

A partir de estas reflexiones y con el propósito de ofrecer rutas orientadas a la acción, es necesario repensar la arquitectura de la política pública para que logre articularse orgánicamente con la Economía Social y Solidaria (ESS). En el ámbito institucional y normativo, Campos (2017) propone implementar esquemas de costos regulatorios proporcionales al tamaño de los activos de las pequeñas cajas y cooperativas, evitando que normativas diseñadas para la banca comercial, como las estrictas certificaciones de prevención de lavado de dinero, asfixien económicamente a las entidades de base comunitaria. Adicionalmente, se requiere reorientar el papel de la banca de desarrollo, particularmente en sus operaciones de segundo piso, asegurando que la intermediación no encarezca los contratos ni transfiera las exigencias de colaterales individuales hacia los usuarios finales, sino que asuma estructuralmente los riesgos inherentes a la vulnerabilidad rural (Campos, 2017).

En lo referente a las dinámicas territoriales, el diseño de los instrumentos de crédito requiere abandonar la estandarización urbana para acoplarse a los ritmos biológicos y socioculturales de los sistemas agrícolas. Salgado Villavicencio (2018) recomienda priorizar la asignación de recursos a partir de indicadores precisos de ruralidad, marginalidad y accesibilidad, adaptando los plazos de recuperación a los ciclos inciertos de las cosechas y reconociendo las dinámicas de pluriactividad que sostienen a los hogares.

Finalmente, el fortalecimiento de la autonomía económica exige que el sistema financiero formal legitime los esquemas basados en el aval comunitario y la corresponsabilidad, permitiendo que el tejido social funcione como respaldo válido frente a la falta de garantías prendarias convencionales. La adopción de estas directrices no sólo atenuaría las fricciones operativas descritas a lo largo del artículo, sino que sentaría las bases para que las comunidades indígenas y campesinas dispongan de un entorno institucional verdaderamente propicio para autogestionar sus recursos y tejer sus propias abundancias (Felipe Giraldo, 2025).

Referencias

- Almeraya-Quintero, S. X., Figueroa-Sandoval, B., Díaz-Puente, J. M., & Figueroa-Rodríguez, K. A. (2011). El crédito en el desarrollo territorial: el caso de financiera rural en México. *Agricultura, desarrollo y sociedad*, 8(2), 179-192.
- Álvarez Castañón, L. d., Páramo Ricoy, T., & Carpio Mendoza, J. J. (2011). De la inclusión financiera a la intervención social: Una experiencia en el sureste de México. *Revista Electrónica Nova Scientia*, 7(4), 125 – 152.
- Campos, P. (2017). *Inclusión financiera de pequeños productores rurales: estudio de caso en México*. Naciones Unidas.
- Domínguez Borbón, V. (2018). Retos de la inclusión financiera en la tribu Yaqui. En S. De la Vega Estrada, & C. A. Ken Rodríguez (Edits.), *Condiciones sociales, empobrecimiento y dinámicas regionales de mercados laborales* (págs. 146-162). Universidad Nacional Autónoma de México; Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional.
- Esparza Gallegos, M., Herrera Díaz de León, L. L., & Colmenares Flórez, R. A. (2024). Inclusión financiera en las personas de comunidades rurales para mejorar sus condiciones de vida. *Diagnóstico fácil empresarial*, 11(22), 13-21. HYPERLINK “<https://doi.org/https://doi.org/10.32870/dfe.vi22.156>” \t “_blank” <https://doi.org/https://doi.org/10.32870/dfe.vi22.156>
- Felipe Giraldo, O. (2025). El buen vivir: El arte de saber tejer las abundancias para darse lo suficiente. *Revista de*

Cruz, E., Lara, M.

Investigación y Proyección Eutopía, Segunda época(6), 87-111. HYPERLINK “<https://doi.org/10.36631/REU.2025.06.04>” \t “_blank” <https://doi.org/10.36631/REU.2025.06.04>

Gómez Rodríguez, D. T., & Barbosa Pérez, E. M. (2023). Agroecología y circuitos cortos de comercialización. Enfoques en diálogo con la naturaleza. *Cooperativismo & Desarrollo*, 31(125), 1-19. HYPERLINK “<https://doi.org/https://doi.org/10.16925/2382-4220.2023.01.02>” \t “_blank” <https://doi.org/https://doi.org/10.16925/2382-4220.2023.01.02>

Jiménez Maldonado, S. (2017). La inclusión financiera y el financiamiento en el sector rural en México. [Tesis de grado]. Universidad Nacional Autónoma de México.

Rocha Sánchez, T. E., & Cruz del Castillo, C. (2013). Barreras estructurales y subjetivas en la transición de roles de mujeres mexicanas y su molestar emocional. *Acta Colombiana de Psicología*, 16(1), 123-135.

Romero Cruz, R. (2026). Autoconsumo y comercialización de productos agrícolas en comunidades rurales de Tabasco: retos y oportunidades. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, XIII(2), 1-30.

Salgado Villavicencio, E. (2018). Acceso de los productores rurales a servicios financieros: El caso Tosepantomín, Puebla, México. [Tesis de doctorado]. Colegio de Postgraduados.